

Auto interlocutorio	257
Radicado	05266-31-03-001-2021-00204-00
Proceso	Verbal (restitución de inmueble – local comercial)
Demandante (s)	Lina María Arango Jaramillo y/o
Demandado (s)	Rincón Mexicano S.A.S.
Asunto	Convoca a audiencia y decreta pruebas

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Cuatro de abril de dos mil veintidós

De conformidad con lo previsto en el artículo 372 del Código General del Proceso, se convoca a las partes y a sus apoderados judiciales, a la audiencia concentrada que se llevará a cabo el día 24 de mayo próximo, a las 9 de la mañana, previniéndolos sobre las consecuencias por la inasistencia, tanto pecuniarias como de índole procesal, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4° de la norma citada.

La audiencia será celebrada de manera virtual, para lo cual, se les enviará a las partes y abogados, así como a los testigos que serán oídos, el correspondiente enlace con las indicaciones pertinentes.

Decreto de pruebas:

Parte demandante:

1. Ténganse como prueba los documentos aportados con la demanda.
2. El representante legal de la sociedad demandada absolverá interrogatorio de parte.

3. Se niega la declaración de parte de la codemandante Myriam Jaramillo Uribe, solicitada en el escrito del pronunciamiento frente a las excepciones planteadas, pues se considera que *“la parte no puede pedir su propia declaración”* como se ha querido hacer ver por algunos doctrinantes.

Por compartir plenamente lo que sobre ese particular ha dicho el catedrático Ramiro Bejarano Guzmán, Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, se transcribe lo siguiente:

“Recuérdese que los partidarios de esta exótica tesis del interrogatorio a instancias de la propia parte han venido sosteniendo que en el nuevo CGP sí es posible que cada parte pueda pedir su propia declaración, basados en que el artículo 198 del CGP, que reformó los artículos 202 y 203 del derogado CPC, no reprodujo el aparte que preveía que “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria”. Sobre bases tan endeble se ha vendido la idea de que como en el nuevo texto se suprimió esa restricción que limitaba a una parte pedir la citación de la contraria a que absolviera interrogatorio, ello significa que ahora pueda pedir su propia declaración.

Ni por asomo puede decirse que el hecho de haber suprimido la frase “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria” significa que cada quien puede pedir su propia declaración. Ni en la exposición de motivos del CGP, ni en las actas que reposan en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la Comisión que elaboró ese estatuto, se advierte que la tesis de la declaración de la propia parte hubiese sido siquiera discutida. Si no lo fue, menos pudo haber quedado incluida para la vía del silencio o de la supresión de una frase.

Para apoyar el dislate de que en nuestro sistema la parte puede pedir su propia declaración, se ha dicho por algunos que, de no permitir esa posibilidad, se violarían los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración de los Derechos Humanos, porque estos estatutos consagran el derecho de una parte a ser “oída públicamente”. En ninguno de estos estatutos se previó la facultad de una parte a pedir su propia declaración

como un derecho humano; es más, el tema de la declaración a instancias de la propia parte ni siquiera está mencionado en ninguno de estos estatutos. Ser oído públicamente es diferente a pedir la declaración de la propia parte, y ese derecho existía en vigencia del CPC, pues la audiencia de recepción del interrogatorio de parte se hacía en audiencia pública a los ojos de la ciudadanía. Lo que sorprende es que ahora se invoquen los derechos humanos para sacar adelante esta tesis, cuando durante los 45 años de vigencia del CPC a ninguno de los muy autorizados tratadistas de pruebas se le ocurrió sostener que ese estatuto violaba los derechos humanos al no autorizar la declaración a solicitud de la propia parte.

A lo anterior ha de agregarse un detalle que seguramente no han advertido los defensores de la tesis de la declaración a instancias de la propia parte, que es contundente. En efecto, si fuese cierto que la supresión de la expresión “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria” significa que la parte puede pedir su propia declaración, no se entiende, entonces, la razón por la cual el artículo 184 del CGP, al regular lo relativo al interrogatorio de parte extraprocesal, previó que “quien pretenda demandar o tema que se le demanda podrá pedir por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso”.

Es decir, tan no es cierto que el CGP haya autorizado a la parte a pedir su propia declaración en el curso de un proceso, que al regular el decreto de la misma prueba en el escenario extraprocesal, expresamente se previó que puede solicitarla una parte, pero solamente respecto de “su presunta contraparte”.

El pedimento del interrogatorio de parte es el mismo sea que se solicite para recaudarse en un proceso o como prueba extraprocesal, más aún cuando el CGP no dijo que el interrogatorio en un proceso lo pueda pedir también el propio interesado¹.

¹ <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/civil-y-familia/la-parte-no-puede-pedir-su-propia-declaracion>. Léase también, del mismo autor, el ensayo “Falencias Dialécticas del Código General del Proceso”, en Memorias del XXXVIII Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2017, págs. 639 a 654.

Parte demandada:

1. Téngase como pruebas los documentos aportados con la contestación a la demanda.

2. Se decreta la recepción de los testimonios de Jorge Humberto Restrepo Álvarez, Camilo Hernández Montoya, Sandra Milena Bustamante y William Alejandro Villa García.

3. Los demandantes absolverán interrogatorios de parte.

4. Se peticiona el nombramiento de peritos, uno para determinar, identificar y cuantificar las mejoras alegadas, y otro, para determinar el valor de la prima comercial o Good Will del establecimiento de comercio que opera en el inmueble a restituir, a lo cual no se accede, teniendo en cuenta que el art. 227 *ídem*, establece que la *“parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas”*²

5. Por las razones expuestas anteriormente, también se niega la práctica de inspección judicial al local objeto de restitución. Debe recordarse que el artículo 236 *ídem* en su inciso segundo, establece que salvo *“disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba”* y, en su inciso cuarto, expresa que el juez *“podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el*

² Art. 173. *“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”*

dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso”.

NOTIFÍQUESE


GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

45

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 51
Fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, 07 de abril de 2022



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria